

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020).

Auto Interlocutorio No. _____

MAGISTRADO PONENTE: FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
EXPEDIENTE:	76001-33-33-005-2019-00158-01.
DEMANDANTE:	GENTIL ROJAS LIBREROS
DEMANDADO:	UNIVERSIDAD DEL VALLE
ASUNTO	APELACIÓN AUTO – REVOCA

I. OBJETO DE LA DECISION

Se resuelve el recurso apelación propuesto por la parte demandante, contra el auto interlocutorio nro. 448 del 23 de julio de 2019, proferido por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali, a través del cual se dispuso el rechazo de la demanda por considerar que la resolución demandada es un acto administrativo de ejecución, no susceptible de control judicial.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA, el señor GENTIL ROJAS LIBREROS, a través de apoderado judicial, demandó a la UNIVERSIDAD DEL VALLE y solicitó¹ la nulidad de la Resolución nro. 1792 del 23 de abril de 2014, a través de la cual la entidad demandada, en cumplimiento de lo ordenado en sentencia del 8 de junio de 2007 por el Juzgado Décimo Administrativo de Cali, reliquidó la pensión del demandante.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la entidad demandada emitir un nuevo acto administrativo que “(...) ordene el pago de las diferencias resultantes de la indexación”.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio nro. 448 del 23 de julio de 2019, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali dispuso rechazar la demanda, por considerar que la Resolución nro. 1792 del 23 de abril de 2014 enjuiciada fue emitida en cumplimiento de una sentencia y, en consecuencia, se trata de un acto de ejecución no pasible de control judicial².

VI. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

El apoderado judicial de la parte demandante, inconforme con la decisión tomada por el *a quo*, interpuso recurso de apelación³ en primer lugar, citó jurisprudencia del Consejo de Estado referente a la procedencia del control jurisdiccional frente a un acto de ejecución cuando éste contiene hechos nuevos o diferentes a los consignados en la orden judicial y a los casos en los que se considera configurada la cosa juzgada.

¹Folio 35.

² Folios 46-47.

³ Folios 49-55.



Radicación : 2019-00158-01
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Demandante : GENTIL ROJAS LIBREROS
Demandado : UNIVERSIDAD DEL VALLE 2

Seguidamente, sostuvo que:

“1. No se actualizó o indexó el salario del demandante, pues la pensión se liquidó con el promedio salarial del último año de servicio – 01/03/1995 a 29/02/1996 y la Universidad del Valle reconoció la pensión de jubilación a partir del 09 de septiembre de 1996. Transcurrieron más de 6 meses, entre una y otra fecha.

2. No se incluyeron los factores salariales sobre los cuales aportó para pensión”

Finalmente, concluyó que frente al acto administrativo demandado no se configura la cosa juzgada, comoquiera que existen hechos nuevos diferentes a los fallados inicialmente y, por lo tanto, no hay identidad de causa petendi, y que tampoco éste se trata de un acto de ejecución, por manera que es pasible de control judicial.

IV. CONSIDERACIONES:

4.1. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae a establecer si el acto administrativo demandado es pasible de control judicial, para lo cual deberá establecerse qué decisiones de la Administración pueden ser demandadas ante esta jurisdicción.

4.2. TESIS

Se revocará la providencia apelada, toda vez que, si bien la resolución demandada es un acto de ejecución, su contenido excede de manera parcial la orden judicial en virtud de la cual fue proferida.

4.3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

El artículo 169, numeral 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo preceptúa que la demanda podrá ser rechazada cuando el asunto no sea susceptible de control judicial.

Ahora bien, El Honorable Consejo de Estado ha definido el acto administrativo como la manifestación de voluntad de la Administración, que contiene una decisión expresada en la forma prevista en la ley y que tiene la virtualidad de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones en situaciones generales o particulares para los administrados o para la propia Administración, cuyo contenido se presume ajustado a derecho, mientras no sea anulado por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo⁴.

Dicha Corporación también ha sido enfática en señalar que los únicos actos administrativos enjuiciables son los de carácter definitivo⁵, los cuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

⁴ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2012, Consejera Ponente Dra. **RUTH STELLA CORREA PALACIO**, radicación número 05001-23-26-000-1994-00558-02 (20810).

⁵ Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 15 de mayo de 2014, Consejero Ponente Dr. **HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS**, radicación número 20001-23-33-000-2013-00005-01.



Radicación : 2019-00158-01
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Demandante : GENTIL ROJAS LIBREROS
Demandado : UNIVERSIDAD DEL VALLE 3

Contencioso Administrativo, son los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible continuar con la actuación.

En consonancia con lo anterior, se tiene entonces que esta jurisdicción es la encargada de realizar el control de legalidad de los actos administrativos definitivos, entendidos estos como la manifestación de voluntad de la Administración, generadora de efectos jurídicos.

En cuanto a los actos administrativos de ejecución, estos no se consideran definitivos, por cuanto no definen una situación jurídica diferente a la que ya fue resuelta previamente, en cumplimiento de una sentencia o una conciliación judicial⁶. Sin embargo, hay lugar a estudiar la legalidad de este tipo de decisiones de la Administración cuando exceden, parcial o totalmente, lo dispuesto en la orden judicial, comoquiera que, de tal modo, se estaría creando, modificando o extinguiendo una situación jurídica diferente⁷.

4.4. CASO CONCRETO

De conformidad con el artículo 320⁸ del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 306⁹ del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, pronunciándose **solamente** sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

Recapitulando, se tiene que mediante auto interlocutorio nro. 448 del 23 de julio de 2019, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali dispuso rechazar la demanda, por considerar que la resolución demandada es un acto de ejecución y, por ende, no es pasible de control jurisdiccional.

Por su parte, el apoderado judicial de la parte demandante impugnó dicha decisión manifestando que hay lugar estudiar la legalidad del acto administrativo demandado en la medida que son hechos diferentes a los dirimidos en la sentencia en virtud de la cual éste fue proferido, los que motivan la interposición de la presente demanda; aunado a que la aludida decisión no corresponde en su totalidad a un acto de ejecución. Hizo énfasis en que en el acto demandado no se dispuso la actualización del salario del demandante, *“pues la pensión se liquidó con el promedio salarial del último año de servicio – 01/03/1995 a 29/02/1996 y la Universidad del valle reconoció la pensión de jubilación a partir del 09 de septiembre e 1996. Transcurrieron más de 6 meses, entre una y otra fecha”*, y no

⁶ Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B – auto del 8 de febrero de 2012 – Consejera Ponente RUTH STELLA CORREA PALACIO – radicación nro. 15001-23-31-000-1997-17648-01 (20689).

⁷ Consejo de Estado – Sección Cuarta – auto del 26 de septiembre de 2013- Consejero Ponente JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ- radicación nro. 68001-23-33-000-2013-00296-01 (20212). Consejo de Estado, Sección Segunda – auto del 9 de abril de 2014 – Consejero Ponente LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO, radicación nro. 73001-23-31-000-2008-00510-01 (1350-13). Consejo de Estado – auto del 9 de febrero de 2017 – Consejera Ponente SANDRA LISSET IBARRA BÉLEZ – radicación nro. 05001-2333-000-2013-00343-01 (0952-2014).

⁸ Artículo 320. Fines de la apelación.

El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.

(...).

⁹ ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.



se incluyeron los factores salariales a los cuales aportó para pensión el demandante.

Pues bien, en primera medida debe decirse que el acto administrativo demandado – Resolución nro. 1792 del 23 de abril de 2014¹⁰ - es un acto de ejecución, comoquiera que el mismo se profirió en cumplimiento de la sentencia nro. 55 del 8 de junio de 2007, proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cali¹¹, la cual ordenó lo siguiente:

“1.- DECLARAR INFUNDADAS LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LA PARTE DEMANDADA.

2. DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN nro. 597 del 11 de marzo de 1996, “Por la cual se reconoce y autoriza el pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación”, proferida por la Rectoría de la Universidad del Valle y a favor del señor GENTIL ROJAS LIBREROS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. DECLARAR que el señor GENTIL ROJAS LIBREROS tiene derecho a que LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, o la entidad a cuyo cargo esté hacerlo, le reconozca y pague una pensión mensual vitalicia de jubilación, con efectos fiscales a partir del 09 de septiembre de 1996, - fecha en que cumplió la edad legal que establece la ley, teniendo en cuenta el tope de los 20 salarios mínimos legales establecidos en la Ley, sin incluir la doceava parte de las primas de navidad y de vacaciones, y liquidándola con el 75% del salario devengado de conformidad con las consideraciones de ésta sentencia.

4. NEGAR las demás pretensiones de la Demanda.

5. DÉSE cumplimiento a la Sentencia bajo los términos del artículo 176 del C.C.A.”

Sin embargo, encuentra este juzgador que en el escrito de la demanda¹², se alega que en el referido acto de ejecución se omitió efectuar la actualización de la primera mesada pensional del demandante. En efecto, al revisar la parte considerativa de la Resolución nro. 1792 del 23 de abril de 2014, se puede evidenciar dicha situación:

“(…)

7. Que el señor GENTIL ROJAS LIBREROS puede jubilarse de conformidad con el monto, la edad y el tiempo de servicios señalados por la Ley 33 del 29 de Enero de 1985, normatividad legal aplicable antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (junio 30 de 1995) y conforme el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 y acuerdo con la decisión proferida en la Sentencia nro. 55 del 8 de junio de 2007 del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, se liquidará la Pensión de Jubilación aplicando el 75% del promedio de los factores establecidos por las Leyes 33 y 62 de 1985 y el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, devengados durante el último año de servicios comprendido entre el 1 de marzo de 1995 y el 29 de febrero de 1996,

¹⁰ Folios 3-6.

¹¹ Folios 7-25.

¹² Folios 31-39.



por el señor GENTIL ROJAS LIBREROS, así:

Promedio salarial del último año de servicios
(Marzo 01 de 1995 a Febrero 29 de 1996)
\$26.639.685 / 12 meses = \$2.219.974
\$2.219.974 x 75% = \$1.664.980

8. Que efectuada la reliquidación de la mesada pensional de acuerdo con lo ordenado en la sentencia No. 55 del 08 de junio de 2007 del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, se establece que el derecho a la pensión de jubilación se reconoce a partir del 09 de Septiembre de 1996 (fecha de cumplimiento del requisito de edad), por un valor de \$1.664.980 y conforme al artículo 14 de la Ley 100 de 1993 o por las normas que sobre la materia en el futuro reglamenten, complementen, modifiquen o lo sustituyan, se reajusta anualmente según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, así:

AÑO	IPC	VLR MESADA
1996		1.664.980

(...)"

Nótese que el cálculo de la mesada pensional se efectúa teniendo en cuenta el promedio de lo devengado por el demandante entre el 1 de marzo de 1995 y el 29 de febrero de 1996 y la primera mesada es reconocida a partir del 9 de septiembre de 1996 sin que la misma sea indexada; situación que alega la parte demandante a través del medio de control de la referencia.

En ese orden de ideas, se concluye que hay lugar a estudiar la legalidad de la Resolución nro. 1792 del 23 de abril de 2014, comoquiera que esta excedió de manera parcial la orden emitida en la sentencia nro. 55 del 8 de junio de 2007 proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali y, en esa medida, se genera una nueva situación jurídica que debe ser dirimida a través de este medio de control.

En consecuencia, se

RESUELVE:

PRIMERO.- REVÓCASE el auto nro. 448 del 23 de julio de 2019, proferido por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali, mediante el cual se rechazó la demanda. En su lugar, **ORDÉNASE** a la autoridad judicial de primera instancia, que provea sobre la admisión de la demanda.

SEGUNDO.- DEVUÉLVASE al Juzgado de origen para lo de su cargo, cancélese su radicación y sin costas en esta instancia.¹³

¹³ ACH
VoBo Secretario

Radicación
Medio de control
Demandante
Demandado

: 2019-00158-01
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
: GENTIL ROJAS LIBREROS
: UNIVERSIDAD DEL VALLE 6



NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,



FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ

Magistrado